

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, primero (1º) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: RUBIELA DE JESÚS DÍAZ CASTRILLÓN
Demandada	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-
Radicado	: 05001 31 05 010 2019 00728 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social –Pensión de sobrevivientes, intereses moratorios -
Decisión	: Modifica decisión condenatoria
Sentencia N°	: 177

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Declarar que al señor Humberto Rojas Moreno dejó causada la pensión de sobrevivientes y que la señora Rubiela

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el

de Jesús Díaz Castrillón es beneficiaria de la misma y en consecuencia se condene a su reconocimiento a partir del 30 de mayo de 2018, incluidas las mesadas adicionales; **pago de intereses moratorios** o en subsidio la **indexación**; costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Afirmó el apoderado de la parte actora, que el señor Humberto Rojas Moreno falleció el 30 de mayo de 2018, quien ostentaba la calidad de pensionado por vejez de Colpensiones; que el causante convivió de manera continua con la demandante Rubiela de Jesús Díaz Castrillón desde el año de 1960, contrayendo matrimonio civil el 13 de abril de 1978, procreando siete (7) hijos.

Explicó que la convivencia de la pareja fue siempre única y exclusiva compartiendo techo, lecho y mesa por espacio de 33 años aproximadamente, esto es, entre 1960 a 1993; que para éste último año la convivencia cesó por causales imputables al señor Humberto Rojas Moreno, dado los constantes maltratos físicos y verbales en contra de la demandante, quien indica recibía por parte de su cónyuge un trato cruel y denigrante tanto en privado, delante de sus hijos y en público, por lo cual no tuvo otra opción sino de dejar la convivencia para proteger su integridad física y emocional; sin embargo continuó la ayuda y socorro mutuo a pesar de no tener convivencia, incluso la afilió a salud entre los años 2001 a 2007, le auxiliaba económicamente, toda vez que el vínculo matrimonial estaba vigente, tenían siete (7) hijos y ella no laboraba.

Cuenta que el causante al momento del fallecimiento vivía

solo en un apartamento en Bello, cercano a la residencia donde vivía su mandante con sus hijos; agrega que la demandante actualmente cuenta con 78 años de edad, no recibe pensión, ni realiza actividad económica alguna que le permita su sostenimiento, viéndose desmejorada su situación ante el fallecimiento de su cónyuge.

Sostiene que la demandante solicitó a Colpensiones el 31 de junio de 2018, la pensión de sobrevivientes, siéndole negada la mediante las Resoluciones 239065, 309044 y DIR 21139 todas de la referida anualidad, argumentándose que no existió convivencia con el causante desde hacía más de cinco (5) años.

RESPUESTA A LA DEMANDA:

COLPENSIONES a través de apoderada judicial, aceptó la calidad de pensionado del causante Humberto Rojas Moreno, su fallecimiento y la negativa de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante; respecto a los demás hechos indica que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir pensión de sobrevivientes; improcedencia de reconocer y pagar intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 199; improcedencia de la indexación de las condenas; cobro de lo no debido; imposibilidad de condena en Costas; prescripción, buena fe y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El **Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, declaró** que a la señora Rubiela de Jesús Díaz Castrillón, en

calidad de cónyuge supérstite del pensionado fallecido Humberto Rojas Moreno, le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. **Condenó a Colpensiones, a pagar la suma de \$39.139.959,00 por retroactivo pensional**, causado entre el 30 de mayo de 2018 y el 31 de agosto de 2021, autorizó a la entidad demandada a efectuar los descuentos por aportes al riesgo de salud. A partir del primero (1º) de septiembre del referido año, la accionada continuará reconociendo la mesada pensional, en cuantía de \$908.526,00 mensuales, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad y aplicando los incrementos anuales dispuestos por el Gobierno Nacional, con carácter vitalicio. **Condenar al pago de los intereses moratorios** establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados sobre el retroactivo pensional, a partir del mes de octubre de 2018 hasta la fecha en que haya de producirse su pago efectivo. **Declaró no prosperaras las excepciones** de mérito propuestas. **Condenó en costas a cargo de la entidad demandada**, fijando como agencias en derecho, el equivalente al 5% del valor de la condena por retroactivo pensional a favor de la parte actora.

Para sustentar lo anterior, **argumentó el a quo que el causante Humberto Rojas Moreno dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, cumpliendo la demandante los requisitos para tener derecho a la misma**, toda vez que se acreditó la existencia del matrimonio civil con el causante desde el año 1978 e incluso con convivencia anterior pero no precisado el tiempo de la misma, por lo que la convivencia fue por lo menos de 15 años, ya que se presentó separación de hecho desde el año de 1993 por los malos tratos físicos y de palabra por parte del cónyuge fallecido, demostrándose una convivencia de cinco (5) años en cualquier tiempo, la cual, conforme la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, se requiere en los eventos en los cuales pese haber cesado la convivencia, persiste el vínculo matrimonial, como ocurre en este caso, condenando al

reconocimiento de la prestación pensional de manera vitalicia, a partir de la fecha de fallecimiento del causante, al no configurarse el fenómeno de la prescripción y con derecho a 14 mesadas y en cuantía equivalente a la mesada pensional que recibía el pensionado, esto es, el salario mínimo legal mensual.

Condenó al pago de intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al presentarse mora en el reconocimiento de la pensión al asistir derecho a la misma, además de no encontrarse acreditada justificación alguna por parte de Colpensiones para negarla, pues desde el año 2012 es consistente, unánime y pacífica la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia respecto a la convivencia de cinco (5) años de los cónyuges en cualquier tiempo.

RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada de Colpensiones formuló recurso de Apelación, solicitando se revoque en su integridad la decisión de Primera Instancia, indicando en cuanto a la pensión de sobrevivientes que debe partirse de lo preceptuado en la Sentencia SU 149 de 2021, en la cual la H. Corte Constitucional establece el cumplimiento tanto de la cónyuge como de la compañera del requisito de convivencia en los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del pensionado o afiliado, debiéndose demostrar una convivencia efectiva, la persistencia del concepto de familia y ayuda mutua; que en este caso no se demostraron causales imputables al pensionado de maltrato machista y violencia física hacia la demandante. Agrega que se presentó incongruencia en lo indicado por la demandante y una de las testigos, ya que ella indicó que era ama de casa, mientras que la declarante Margarita María Jaramillo, dijo que además tenía una tienda, sin que por tanto se refleje el requisito de dependencia económica.

Considera que el *a quo* desconoció lo señalado en la Sentencia SL 11897 de 2016, en cuanto a que los intereses moratorios no son viables cuando existe una razón valedera de la entidad demandada para negar el reconocimiento pensional y en este caso la entidad, luego de la investigación administrativa, la negó por cuanto la actora no acreditó la veracidad de la convivencia efectiva con el causante, máxime que en la demanda se indicó maltrato y violencia intrafamiliar; debiéndose absolver a su mandante del referido concepto.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

El apoderado de la demandante Rubiela de Jesús Díaz Castrillón, solicita se confirme la condena a intereses moratorios, al no existir justificación de Colpensiones para negar la pensión, de acuerdo con el precedente pacífico existente en la jurisprudencia nacional sobre el derecho a la prestación que le asiste a las cónyuges supérstites con separación de hecho cuando acreditan cinco (5) años de convivencia en cualquier tiempo, resultando evidente la negligencia de la entidad al momento de llevar a cabo la investigación administrativa, en tanto para el momento de la reclamación ya tenía conocimiento de la situación civil del causante y aun así negó el derecho.

Y la apoderada de Colpensiones, reitera los argumentos indicados tanto al contestar a la demanda como al sustentar su recurso de Apelación, solicitando se revoque en su integridad la Sentencia de Primera Instancia.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide

la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**; lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia, analizándose si la señora Rubiela de Jesús Díaz Castrillón, demostró el requisito de convivencia con el causante pensionado para tener derecho a la pensión de sobrevivientes; en caso afirmativo si hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios. Se conocerá en Consulta en favor de Colpensiones con respecto a la legalidad de las condenas impuestas en su contra.

Encontrando esta Colegiatura procedente modificar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

1° Pensión de sobrevivientes:

En cuanto a los argumentos aducidos por la apoderada de Colpensiones en su recurso de Apelación, encuentra esta Sala de Decisión Laboral que no le asiste razón, toda vez que como lo concluyó el *a quo*, si bien existió una separación de hecho de la demandante y el causante Humberto Rojas Moreno desde el

año de 1993, se demostró convivencia de cinco (5) años en cualquier tiempo con vínculo matrimonial vigente; advirtiéndose además esta Sala de Decisión que el requisito de la convivencia no se descarta por la sola separación de cuerpos de los cónyuges máxime si el beneficiario de la pensión ha sido sometido a maltrato físico o psicológico, pues en esos eventos la jurisprudencia ha entendido que su renuncia a la cohabitación debe entenderse como un ejercicio legítimo de protección de sus derechos a la vida e integridad personal; veamos:

No es motivo de discusión en esta Segunda Instancia, que la demandante Rubiela de Jesús Díaz Castrillón contrajo matrimonio con el señor Humberto Rojas Moreno el 13 de abril de 1978²; que éste último falleció el 30 de mayo de 2018³, momento para el cual se encontraba pensionado por vejez mediante Resolución 7846 del año 2001⁴ y que mediante Resoluciones SUB 239065, SUB 309044 y DIR 21139 todas del año 2008⁵, le fue negada la pensión de sobrevivientes a la demandante, argumentando ausencia del requisito de convivencia.

Al haber fallecido el causante pensionado, señor Humberto Rojas Moreno, el 30 de mayo de 2018⁶, la normatividad a aplicar es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que preceptúa que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia el cónyuge o la compañera (o) permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y en **el caso de que la pensión “se cause por muerte del pensionado, se deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no**

² Folios 20 a 23 del archivo 01 del expediente digital.

³ Folio 17 del archivo 01 del expediente digital.

⁴ Se acepta expresamente por Colpensiones en el hecho 2º de la respuesta a la demanda y en la Resolución DIR 21139 de 2018 -Folios 77 y 27 del archivo 01 del expediente digital.

⁵ Folios 27 a 31 del archivo 01 del expediente digital.

menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte”. Estableciendo **el inciso 3° del literal b)**, que **“si hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte** de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. **La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.**

Frente a la norma anterior, **la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral**, en el caso de pensionado fallecido, en la Sentencia SL 359 de 2021, reiterando su jurisprudencia precisó, que **“la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años, puede ser acreditado «en cualquier tiempo».** Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cuius, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020).” (Negrillas y subrayas fuera del texto). En la SL 1646 de 2019, indicó que **“en caso de separación de hecho, la cónyuge no pierde el derecho pensional respecto del fallecido, siempre que el vínculo matrimonial permanezca vigente y a su vez, se acredite la convivencia de los cinco años en cualquier tiempo”** (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Y en los casos en que la separación se da por maltrato físico de uno de los cónyuges, la H. Corte en Sentencia SL 2010 de 2019, reiterada entre otras, en las SL 1727 de 2020, SL 1147 y 1473 de 2023, señaló que **“el presupuesto de la convivencia exigido legalmente no se puede descartar por la pura y simple separación de cuerpos de los cónyuges, específicamente en contextos en los que el presunto beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o psicológico, que lo lleva forzosamente a la separación, como en el caso de la demandante. En escenarios de este tipo, no se puede culpar al consorte víctima de renunciar a la cohabitación y castigarlo con la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues, además de que la separación es un ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la vida y la integridad personal, el legislador no lo puede obligar a lo imposible o establecerle cargas irrazonables,**

⁶ Folio 17 del archivo 01 del expediente digital.

como lo reclamó la demandante en el texto de la demanda...” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Atendiendo a lo expuesto, tenemos que en el asunto debatido, tal como se explicará a continuación, **con las declaraciones de las señoras Margarita María Jaramillo Patiño y Margarita Díaz Castrillón, se demostró la convivencia mínima** del causante y la demandante como cónyuges, **por más de cinco (5) años**, esto es, por lo menos entre los años 1978 a 1993; de igual forma las testigos corroboran lo indicado por la actora tanto en la demanda como en su interrogatorio de parte, en cuanto a que **la separación fue debido a los maltratos físicos y psicológicos de que fue víctima la demandante Rubiela de Jesús Díaz Castrillón por parte del señor Humberto Rojas Moreno**; en lo pertinente, las referidas testigos y la demandante en el interrogatorio, indicaron lo siguiente:

La señora Margarita María Jaramillo Patiño, indicó que conoce a la demandante porque es su suegra y sabe convivió con el causante hasta el año 1993, procrearon 7 hijos y que la convivencia fue inicialmente como compañeros permanentes hasta el año de 1978, cuando nació el último hijo en que se casaron. Afirmó que el causante tenía una tienda en el barrio San Blás y la separación se dio por cuanto la demandante trabajaba en la misma, pero no podía hablarle a nadie, incluso ni a mujeres, porque el causante era muy celoso y le pegaba, era bastante maltratador, tanto física como verbalmente y en vista de ello las hijas optaron por que se fuera a vivir con una de ellas. Asegura que el causante luego de la separación vivió sólo, no tuvo convivencia ni hijos con nadie. Manifiesta que hasta donde ella sabe, la señora Rubiela nunca hizo ninguna denuncia ante autoridad alguna por el maltrato que le daba el causante.

Declaró igualmente la señora **Margarita Díaz Castrillón**, hermana de la causante, quien manifestó que desde 1972, en que ella tenía 18 años, vivió con la demandante y su cónyuge hasta el año de 1982. Sostuvo que el señor Humberto Rojas Moreno fue una persona muy mala que maltrataba y le pegaba a su hermana, era muy celoso, siendo ello el motivo de la separación, yéndose a vivir con una hija de nombre Zoy; que actualmente la demandante vive sola, es ama de casa y los hijos le dan lo necesario. Afirma que luego de la separación no volvió a saber nada de él, nunca se enteró que conviviera con otra persona y que cuando él murió fue a las exequias Cuenta que el causante tenía una tienda y su hermana trabajaba ahí con él. Aseguró que luego que se casaron vivieron como 20 años juntos en el barrio San Blas.

Y la demandante en el interrogatorio de parte explicó que inicialmente convivió con el causante 18 años, como compañeros permanentes, luego se casaron en 1978, separándose en el año 1993 por el maltrato de él y ella se fue a vivir con una hija, sin tener ningún contacto con él, siendo sus hijos quienes le ayudan en su sostenimiento y le cotizan, pero sólo en salud en la Nueva EPS. Afirmó que nunca se enteró que su cónyuge hubiera convivido o hubiera tenido hijos con otra mujer. Indica que le avisaron del fallecimiento del causante y asistió a las exequias; que sabe que él vivía solo, cerca de la casa de ella, como a 3 ó 4 cuadras, pero ni ella ni sus hijos sabía dónde residía. Cuenta que cuando se separaron estaban dos hijos de 13 y 14 años y su cónyuge vio por ellos hasta que cumplieron la mayoría de edad. Aseguró que nunca llegó a presentar denuncia ante ninguna autoridad por los maltratos y que él le pegaba por celos, porque ella no podía mirar a nadie.

Analizada en su conjunto la prueba testimonial e interrogatorio de parte reseñados, a la luz de lo establecido en

el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, encuentra esta Sala de Decisión Laboral que en el asunto debatido hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora Rubiela de Jesús Díaz Castrillón, por cuanto se demostró convivencia con el señor Humberto Rojas Moreno de más de cinco (5) años en cualquier tiempo, subsistiendo el vínculo matrimonial; además en este caso en particular no se puede exigir que ese lapso de tiempo con anterioridad al fallecimiento del causante, pues está probado que la separación de la pareja obedeció al maltrato físico y verbal de éste, tal como se precisa en la jurisprudencia antes referida y ofreciendo a ésta Colegiatura credibilidad y certeza lo manifestado por las declarantes sobre las circunstancias fácticas del rompimiento de la convivencia, dado su cercanía y parentesco – nuera una y hermana la otra-, ya que en asuntos de familia son justamente sus integrantes o personas muy allegadas, quienes, por esa condición o cercanía pueden tener un conocimiento más próximo a la realidad de los hechos, máxime en casos de violencia intrafamiliar, que para el presente caso, atendiendo a la fecha de ocurrencia de los hechos, es entendible y creíble que la demandante no hubiera acudido a formular denuncia, dada las condiciones sociales y legislativa de la época.

Sobre el tema, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia SC 4361 del 9 de octubre de 2018, reiterando su jurisprudencia, indicó reiterando su jurisprudencia, precisó en relación con los testimonios de personas con parentesco familiar con alguna de las partes:

“...en modo alguno se ha previsto por el legislador la inviabilidad de que los familiares y las personas con relación de afecto con alguna de las partes puedan atestiguar en las causas donde estén involucrados sus parientes y/o amigos, sin menoscabo, claro está, del mayor rigor que debe aplicarse en su valoración; de suerte que, esa sola circunstancia de relación cercana, no puede, como lo pretende el censor, servir de báculo para desechar dicha probanza, máxime que, en asuntos de familia, en donde son justamente sus

integrantes o personas muy allegadas, quienes, por esa condición o cercanía pueden tener un conocimiento más próximo a la realidad de los hechos que sean materia del litigio. Como ha dicho esta Corte.

«No está por demás recordar que el linaje de los procesos como el que aquí se ventila, impone como verdad que la prueba más corriente de lo que sucede en el ámbito matrimonial, suelen darla las personas que precisamente tienen acceso a él, destacándose, como es obvio, la parentela, la servidumbre y los allegados al seno familiar. La fuerza demostrativa de tales personas no puede desmerecerse por el mero hecho de que allí se observen afectos filiales, de estimación y consideración, o que medie el factor objetivo de la dependencia, pues como lo tiene sostenido la Corte, la severidad examinadora que se impone en relación con testigos en quienes concurren circunstancias como las mencionadas por el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, "...no puede aplicarse con Idéntico rasero en todos los procesos, dado que la índole de la cuestión controvertida en alguno de ellos, señala sin género de duda la conveniencia de atemperarla. Es verdad que no todas las relaciones de la esfera jurídica de las personas se revelan del mismo modo en el mundo exterior; algunas, como las que hallan venero inmediato en las relaciones de familia, se manifiestan las más de las veces en ese cerrado ámbito familiar, franqueando por excepción las fronteras de tal privacidad. De suerte que la percepción y conocimiento de las mismas, acaso sea más probable entre las personas que tienen acceso al núcleo familiar donde se presentan. ...» (Negrillas y subrayas fuera del texto)

Frente a la prueba testimonial aduce la apoderada de Colpensiones que se presentó incongruencia ya que la actora indicó que era ama de casa, mientras que la declarante Margarita María Jaramillo, dijo que además tenía una tienda; sin que por tanto se refleje el requisito de dependencia económica; argumento que no es de recibo para esta Judicatura en tanto no se exige para el reconocimiento la pensión de sobrevivientes dicho requisito y además lo que indicaron las testigos era que ella le ayudaba a su cónyuge en el referido establecimiento.

Es de advertirse igualmente, que no tiene incidencia en la decisión lo precisado por la H. Corte Constitucional en la Sentencia referida por la recurrente, esto es, la SU 149 de 2021, ya que no se desconoce el mínimo de cinco (5) años de convivencia, en este caso respecto de pensionado fallecido, pues como se explicó, se cumple el mismo en cualquier tiempo, al no serle exigible en este caso en concreto que dicho lapso fuera anterior al fallecimiento del causante, al haberse producido

separación por maltrato de éste.

Así las cosas, **se confirmará la decisión de Primera Instancia en cuanto condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora Rubiela de Jesús Díaz Castrillón.**

2° Intereses moratorios:

Solicita la recurrente revocar la condena a intereses moratorios, aduciendo que el *a quo* desconoció lo señalado en la Sentencia SL 11897 de 2016, en cuanto a que no son viables cuando existe una razón valedera de la entidad demandada para negar el reconocimiento pensional; encontrando esta Sala de Decisión no procedente lo pedido toda vez que:

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, establece que se causan intereses en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales. Y el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, preceptúa que: ***“El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el petitionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.”***

De acuerdo a lo expuesto, para el caso de la pensión de sobrevivientes el Fondo Administrador de Pensiones, tiene un plazo de máximo dos (2) meses para decidir si reconoce y paga la prestación solicitada y si en efecto, la entidad niega el derecho solicitado y luego se determina judicialmente que a la reclamante efectivamente le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o supera el término antes indicado, se presenta entonces, un retraso injustificado, causándose intereses

moratorios.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en lo que respecta al reconocimiento de intereses moratorios frente a la prestación pensional que se reclama ha señalado que se deben imponer al margen de la buena o mala fe en que haya incurrido la administradora, siempre que se demuestre el retardo injustificado por parte del obligado y que no hay lugar a su imposición en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación, en los casos en que i) niega el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto; ii) cuando el reconocimiento de la prestación obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que obviamente dicha entidad no podría prever para la época en que le fue presentada la solicitud prestacional; o iii) cuando la administradora niega la prestación pensional por existir disputa entre sus posibles beneficiarios; al respecto ver las Sentencias SL 5673 y SL 1388 del año de 2021; SL 5181 y SL 5172 del año 2020; entre muchas otras.

En el presente asunto, no se presenta una justificación de la entidad para no reconocer la pensión, pues tal como lo indicó el *a quo* desde el año 2012 es consistente, unánime y pacífica la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia respecto a la convivencia de cinco (5) años de los cónyuges en cualquier tiempo e igualmente, como se explicó en precedencia, desde el año 2010 la H. Corte en los casos en que se demuestra separación de los cónyuges por maltrato físico de uno de ellos, ha precisado respecto al requisito de convivencia efectiva que no se le puede obligar a lo imposible o establecerle cargas probatorias irrazonables; antecedentes jurisprudenciales reiterados que no tuvo en cuenta la entidad demandada, procediendo la condena a

intereses moratorios y por tanto la confirmación de la decisión recurrida sobre ese punto.

Consulta:

Atendiendo a que se conoce la decisión en el grado jurisdiccional de Consulta, en favor de Colpensiones, se modificará la decisión en cuanto al valor del retroactivo pensional reconocido, toda vez que respecto al año 2018 se reconocen nueve (9) mesadas y dos (2) días, cuando lo correcto, es ese número de mesadas, pero un (1) solo día; quedando por tanto el valor del retroactivo en la suma de \$39.116.819,00 (y no \$39.139.959,00).

Confirmándose la decisión en todo lo demás, esto es, en cuanto a la fecha de reconocimiento de la pensión, esto es, a partir del 30 de mayo de 2018, fecha de fallecimiento del causante pensionado; el valor de la mesada pensional y la fecha de causación de los intereses moratorios, esto es, pasados dos (2) meses de la reclamación administrativa de la prestación pensional.

Corolario de lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral modificará la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que en Apelación y Consulta se revisa, en cuanto al valor el retroactivo concedido, confirmándose en todo lo demás, incluida la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a

cargo de Colpensiones, al no haber prosperado el recurso de Apelación, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000,00) en favor de la parte demandante; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se MODIFICA la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa y en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, en cuanto al valor del retroactivo causado entre el 30 de mayo de 2018 y el 31 de agosto de 2021, el cual queda en la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L (\$39.116.819,00); confirmándose la decisión en todo lo demás**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se CONDENA en Costas en Segunda Instancia a cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES–**, fijándose las agencias en derecho

la suma de **UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L (\$1.160.000,00)** en favor de la parte demandante; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por EDICTO, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

En ausencia justificada

CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: RUBIELA DE JESÚS DÍAZ CASTRILLÓN
Demandada	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-
Radicado	: 05001 31 05 010 2019 00728 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social –Pensión de sobrevivientes, intereses moratorios -
Decisión	: Modifica decisión condenatoria
Sentencia N°	: 177

FECHA SENTENCIA:

1° de septiembre de 2023

Fijado hoy martes 6 de septiembre de 2023 a las 8:00 a.m.
Desfijado hoy martes 6 de septiembre de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO